

¿Es exigible a través de un medio de impugnación en materia electoral el cumplimiento del resultado vinculante de una consulta popular?

Por: Rocío Rosiles Mejía

Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

Correo electrónico: rrosiles@ceenl.mx

I. Introducción

El siguiente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo un análisis con respecto a la posibilidad de exigir el cumplimiento, a las autoridades a quienes se vincula para ello, de las acciones tendentes a la ejecución de un mandato producto de una consulta popular en aquellos casos en que se omita su realización.

A lo largo de esta ponencia, sostenemos que es posible hacerlo en virtud de que conforme al sistema competencial establecido en la Constitución estamos frente a competencias de ejercicio obligatorio, que conllevan un mandato expreso de cumplimiento, por lo que su omisión, al violar tanto derechos fundamentales como diversos principios democráticos debe ser exigible mediante un recurso judicial efectivo.

II. El cumplimiento del resultado de la consulta popular como competencia de ejercicio obligatorio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido que con respecto a las características del principio de división funcional de poderes, el sistema competencial establecido en la Constitución se expresa de la siguiente forma: a) a través de prohibiciones expresas que funcionan como excepciones o modalidades de ejercicio de otras competencias concedidas; b) como competencias de ejercicio potestativo, y c) mediante competencias de ejercicio obligatorio en donde el órgano del Estado se encuentra obligado a ejercer la competencia dispuesta en nuestra norma fundamental (Jurisprudencia P./J. 9/2006).

De igual modo, en cuanto a la falta del ejercicio obligatorio de las mencionadas facultades, nuestro Máximo Tribunal ha identificado tres tipos de omisiones: administrativas, judiciales, así como legislativas (Tesis 1a. XVIII/2018); clasificando estas últimas en absolutas, cuando el Legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada

ley y no lo ha hecho, y relativas, cuando el aludido poder emite la legislación que debe expedir pero esta es incompleta o deficiente (Jurisprudencia P./J. 11/2006).

En el caso concreto de la consulta popular, es importante señalar que tanto la Constitución como la ley reglamentaria de este mecanismo de participación ciudadana, establecen que esta será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para las autoridades competentes cuando participe al menos el cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (CPEUM, artículo 35, fracción VIII, numeral 2o) (LFCP, artículo 64, 2022).

Por ello, estimamos que, atendiendo tanto a los precedentes de la Suprema Corte como a lo dispuesto en los preceptos antes citados, podemos concluir que, cumplido el porcentaje de participación para que los resultados de la consulta sean vinculantes, estaríamos frente a un ejercicio obligatorio de competencias por parte de las autoridades correspondientes, en virtud de que las referidas normas conllevan un mandato expreso de cumplimiento.

III. Derecho de acceso a la justicia en materia electoral

Tanto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de toda persona de acceder a la justicia mediante tribunales que estarán expeditos para impartirla, y a través de los cuales sea posible interponer un recurso que les ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, teniendo el Estado la obligación de desarrollar las posibilidades del recurso judicial (CPEUM, artículo 17, 2022) (CADH, artículo 25, numeral 1 y 2, inciso b).

Para ahondar más sobre el contenido y alcance del citado derecho en la materia electoral, es importante resaltar lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castañeda Gutman contra México, en el cual el mencionado órgano jurisdiccional, sostuvo que el artículo 25 de la Convención conlleva la posibilidad real de acceder a un recurso judicial a fin de que la autoridad tanto competente como capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que lo reclama estima tener, a efecto de restituir su goce y repararlo.

Asimismo, la Corte resaltó que los Estados deben promover recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos.

También, afirmó que los Estados deben evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, suprimiendo tanto las medidas como las prácticas que restrinjan o vulneren este (Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos, 24-39).

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha advertido que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos para impartir justicia, significa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna de forma que el derecho a la tutela judicial se conculque por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas, así como carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador (Jurisprudencia 1a./J. 42/2007).

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado en su jurisprudencia que a fin de garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, cuando un acto o resolución en materia electoral no admita ser controvertido a través de un medio de impugnación que esté previsto en la ley, sus Salas están facultadas para formar un expediente de Asunto General, mismo que debe tramitarse en términos de las reglas comunes previstas para los medios de impugnación (Jurisprudencia 1/2012).

Igualmente, el Tribunal ha establecido que, en aquellos casos en que la Constitución o en las leyes se reconocen derechos pero no se regula expresamente un procedimiento específico para su protección, se debe implementar un medio sencillo y acorde al caso, en el que se observen las formalidades esenciales del debido proceso, a fin de proceder en plenitud de jurisdicción tanto al conocimiento como a la resolución del asunto, pues dicha insuficiencia adjetiva no podría constituir un obstáculo que privara a los gobernados de la posibilidad de defender sus derechos a través de la garantía de acceso a la justicia efectiva. (Jurisprudencia 14/2014).

Cabe señalar que, a través el recurso de apelación, medio de impugnación que le compete resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es posible impugnar tanto el informe que rinda el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral

sobre el resultado de la verificación del porcentaje de ciudadanos que solicitan que se convoque a dicho plebiscito, como el informe del Consejo General del Instituto respecto del resultado de este mecanismo de participación ciudadana (LFCP, artículo 65, 2022) (LGSMIME, artículo 43 Ter, 2022).

Sin embargo, en cuanto al cumplimiento en aquellos casos en que este ejercicio resultara vinculante, no se advierte la existencia de algún recurso a través del cual se exija su realización pese a que el resultado se hará del conocimiento de la Suprema Corte, misma que notificará a las autoridades correspondientes para que, dentro del ámbito de su competencia, realicen lo conducente para su atención (LFCP, artículo 64, 2022).

De lo anterior, es dable inferir que el Estado mexicano, tiene la obligación de implementar un recurso judicial que la ciudadanía pueda promover en contra de aquellas omisiones o acciones que se estimen insuficientes, por parte de las autoridades competentes, relacionadas con la satisfacción de lo decidido en la consulta.

Una vez analizado lo antes expuesto, estimamos que es necesario revisar tres aspectos que consideramos clave para determinar la exigibilidad judicial del cumplimiento de los resultados vinculantes de una consulta popular.

IV. La naturaleza materialmente electoral de las disposiciones que regulan la consulta popular

Históricamente, se consideró que el Poder Judicial debía permanecer al margen de las cuestiones políticas, por lo que la judicialización de la materia electoral no tuvo la fuerza e importancia que ahora tiene sino hasta bien entrado el siglo XX. Esta postura, no puede explicarse sin atender al debate producto de las posiciones encontradas de José María Iglesias e Ignacio Vallarta, quienes en el siglo XIX fungieron en distintos períodos como presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Durante esa discusión, José María Iglesias, sostuvo que el entonces artículo 16 constitucional, establecía que la autoridad competente es aquella que también es legítima, por lo que concluyó que la legitimidad es previa a la competencia. En su argumentación, resaltó que el amparo se concedía por leyes o actos de cualquier autoridad que violara las garantías individuales, por lo que, en ese tenor, no había acto ni ley alguna que atentara las

garantías individuales por el que dejara de proceder el amparo. Finalmente, afirmó que si un colegio electoral hacía declaraciones que estuvieran en pugna con los preceptos de la Constitución, estas no serían válidas, por lo que los poderes de la Unión se ponían en la necesidad de restablecer los principios del gobierno republicano, representativo y popular (Duarte, 2002: 52-56).

Por otro lado, Vallarta sostuvo que la legitimidad y la competencia son dos cosas distintas, pues estimaba que la elección hecha en términos legales en quien posea los requisitos necesarios constituía la legitimidad de una autoridad, mientras que la competencia no era más que la suma de facultades que la ley le daba para ejercer ciertas atribuciones. Por tanto, defendió que la primera se refería al individuo nombrado para ocupar un cargo público, mientras que la segunda se relacionaba con la entidad moral de la autoridad. Por último, concluyó que solo a las legislaturas les correspondía calificar la legitimidad de sus miembros (Duarte, 2002: 80 y 81).

Luego de lo anterior, no se avanzó en la judicialización de los conflictos electorales sino hasta el año de 1977, cuando se estableció un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que procedía contra las resoluciones del colegio electoral de la Cámara de Diputados, pero cuya resolución no era vinculante para este último órgano. Más adelante, surgió primero el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y posteriormente el Tribunal Federal Electoral, sin embargo estos se limitaban a resolver cuestiones de legalidad (Rebollo, 2000: 879, 902 – 906).

No es hasta 1996 que se consolidó la judicialización a la que antes nos referimos, con el establecimiento de un mecanismo de control jurisdiccional de la constitucionalidad de leyes, actos, así como resoluciones en materia electoral, por lo que ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve aquellos asuntos en los que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, a través de las acciones de inconstitucionalidad, mientras que, el Tribunal Electoral, ejerce un control tanto constitucional como legal de actos y resoluciones de autoridades electorales (Rebollo, 2000: 879, 880, 907 y 908).

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios definiendo lo que es la materia electoral.

En principio, a fin de delimitar su actuación en lo que se refiere a acciones de inconstitucionalidad, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que las normas generales electorales son tanto aquellas que establecen el régimen normativo de los procesos electorales como las contenidos en ordenamientos distintos a una ley, que regulan aspectos vinculados directa o indirectamente en dicho proceso (Jurisprudencia P./J. 25/99). Más adelante, advirtió que si una norma dispone que la designación de un servidor público distinto a los integrantes tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo federales y locales, así como de los ayuntamientos, deba ser elegido mediante elecciones, esta no le confiere el carácter de electoral, pues para que se considere como tal debe regular aspectos relativos a los procesos electorales previstos en la Constitución (Tesis P. XVI/2005).

Posteriormente, el referido órgano jurisdiccional distinguió entre lo que consideró materia electoral “directa” de la “indirecta”, definiendo la primera como aquella asociada tanto con las reglas como con los procedimientos relacionados con la integración de los poderes públicos mediante el voto ciudadano, regidos por una normativa especializada, e impugnables en un contexto institucional especializado, mientras que la segunda se refiere a los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos (Jurisprudencia P./J. 125/2007).

Asimismo, la Corte ha resaltado que, excepcionalmente, cuando junto a la violación de un derecho político se reclamen leyes o actos que entrañen la violación de otros derechos fundamentales, resulta procedente el juicio de amparo. No obstante, también ha señalado que dicha excepción no se actualiza cuando se pretende combatir la violación de derechos políticos, los cuales pueden incidir sobre un proceso o contienda electoral, por lo que en estos casos su examen debe hacerse conforme al marco normativo constitucional que regula los aspectos relacionados tanto de la participación del pueblo en la vida democrática del país como el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público (Tesis P. II/2007).

De igual forma, la Suprema Corte ha reafirmado la improcedencia del juicio de amparo en la materia electoral, indicando que esta no surge solo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, sino por el contenido material

de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que su contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos (Tesis P. LX/2008).

Cabe resaltar que el Comité de Derechos Humanos, en su observación general número 25, dispone que la ciudadanía, además de participar en los asuntos públicos como miembros de órganos legislativos o ejecutivos, también lo hacen participando directamente cuando deciden cuestiones de interés público mediante referendos u otros procesos electorales (CDH, 1996: 2).

En suma, por las razones antes expuestas, se estima que todo aquello que atañe a la consulta popular es tanto formal como materialmente un asunto de naturaleza electoral, por lo que consideramos que es la jurisdicción especializada en la materia, misma que el Estado ejerce a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien debe conocer de las inconformidades que se presenten con relación al incumplimiento de los resultados de este mecanismo de participación ciudadana.

V. Determinación del contenido del o los derechos humanos vinculados con el resultado de la consulta popular, así como de su grado de cumplimiento

En lo que respecta a este punto, si bien es cierto que la Constitución dispone que no pueden ser objeto de consulta popular ni la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, así como las garantías para su protección (CPEUM, artículo 35, fracción VIII, numeral 3o, 2022), también lo es que cabe la posibilidad de que la obligación que surge a cargo de las autoridades producto de que los resultados se vuelvan vinculantes conlleve, en aras del principio de progresividad, la oportunidad de ampliar tanto la protección como el goce de derechos humanos, por lo que será necesario que, a fin de que los órganos jurisdiccionales les sea posible revisar el incumplimiento total o parcial del resultado de una consulta popular, identifiquen el núcleo esencial de los derechos involucrados, así como el ámbito tanto de protección como de goce que se amplía con las acciones que las autoridades se encuentran obligadas a llevar a cabo.

En relación con este punto, existen diversas teorías en torno a la naturaleza del contenido esencial de un derecho humano, entre las que destacan las siguientes:

- Teoría absoluta: El contenido esencial de un derecho está constituido por los rasgos típicos que configuran un derecho fundamental, representando de este modo un “límite a los límites” de los derechos fundamentales.
- Teoría relativa: La afectación del contenido esencial debe ser juzgada con relación a la finalidad del derecho fundamental. Niega la existencia de algún elemento permanente, identificable e intocable como contenido esencial del derecho fundamental. Considera que, el contenido esencial se refiere a la prohibición de limitaciones arbitrarias o desproporcionadas. Para definir lo anterior, se apoya del test de proporcionalidad a fin de examinar la razonabilidad de la limitación.
- Teoría del contenido esencial de modo absoluto pero relativizado de modo inmanente: Aunque en ningún caso puede ser afectado un derecho fundamental en su contenido esencial, este tampoco puede ser objeto de pretensión cuando son puestos en peligro otros derechos fundamentales o bienes jurídicos necesarios para la estabilidad de la comunidad (Martín, 2008: 132-140).

Sobre este punto, cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que en el caso concreto de los derechos sociales, existe un deber incondicional de proteger su núcleo esencial, resaltando que pueden existir violaciones tan graves a esos derechos al grado de atacar directamente la dignidad de las personas, de tal suerte que si esto ocurre los tribunales deben declarar que se viola su núcleo esencial, y, por tanto, ordenar su inmediata protección. Para ello, el referido órgano jurisdiccional destaca distintos niveles de protección de estos derechos: a) un núcleo esencial que protege la dignidad de las personas e impone al Estado obligaciones de cumplimiento inmediato e ineludible en caso de una vulneración, b) cuando se sobrepase ese núcleo esencial, un deber de alcanzar progresivamente la plena realización del derecho, y c) un deber de no adoptar injustificadamente medidas regresivas (Tesis 1a. CXXIV/2017).

En ese sentido, debemos resaltar que nuestro Máximo Tribunal, ha sentado jurisprudencia respecto a la dignidad humana, señalando que esta es un derecho fundamental que consiste en la obligación tanto de las autoridades como de los particulares de tratar a las personas como tales y no como un objeto, prohibiendo que estas sean humilladas, degradadas, envilecidas o cosificadas (Jurisprudencia 1a./J. 37/2016).

No obstante, es importante advertir que el entonces Ministro José Ramón Cossío Díaz, en el voto particular que emitió durante la resolución del amparo 566/2015, afirmó que, en estos casos, se debe construir un test de razonabilidad, al tiempo que estimó que una política pública puede considerarse razonable si el Estado logra acreditar que se encuentra utilizando el máximo de sus recursos disponibles para ir mejorando progresivamente el derecho en cuestión. Citando al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Cossío señaló que dicha institución ha instado a los Estados a que en sus informes sobre el cumplimiento de la realización progresiva de esos derechos incluyan datos tanto cuantitativos como cualitativos que permitan apreciar el progreso logrado (Amparo en revisión 566/2015, voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz: 7 – 11).

Más adelante, la Primera Sala de la Suprema Corte, al analizar el derecho a la salud, suscribió lo antes expuesto, al indicar que ante una omisión el Estado tiene la carga de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer ese derecho (Tesis 1a. XV/2021).

En conclusión, puede considerarse como parámetros para evaluar el cumplimiento de una consulta popular lo siguiente: a) Determinar el contenido de o los derechos humanos sujetos a ampliación gracias a las acciones de cumplimiento de la consulta popular, y b) analizar si las autoridades vinculadas están utilizando el máximo de sus recursos posibles para cumplir con sus obligaciones en la materia.

VI. Interés legítimo para exigir el cumplimiento de los resultados de una consulta popular

Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de que la ciudadanía cuente con interés para promover un medio de impugnación contra la omisión de cumplir con los resultados vinculantes de una consulta popular, cabe resaltar que el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, ha sentado diversos precedentes en los que ha maximizado el derecho de acceso a la justicia.

Entre estos, destaca el reconocimiento de un interés legítimo a cualquier integrante de grupos históricamente discriminados para acudir a juicio, a efecto de combatir un acto constitutivo

de afectación a sus derechos político-electorales de todo el colectivo, sin que sea necesario un perjuicio directo (Jurisprudencia 9/2015).

En el mismo sentido, con respecto a la población indígena, se ha advertido que se debe tener un mayor cuidado en la aplicación de las causas de improcedencia, a fin de garantizar su acceso a la jurisdicción del Estado, sin que se interpongan impedimentos procesales por los que indebidamente se prescinda de sus particularidades características (Jurisprudencia 7/2013). Además, de que en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el juzgador tiene la obligación de analizar la legitimación activa de este grupo poblacional de una manera flexible (Jurisprudencia 27/2011).

En ese sentido, considerando que el derecho de participación política no es solo un derecho individual, sino que también es carácter colectivo, por lo que cabría hablar de un interés difuso (SUP-JDC-1127/2021).

VII. Conclusiones

De lo antes expuesto, podemos concluir que:

- En los casos en que sea vinculante el resultado de una consulta, nos encontramos frente a competencias de ejercicio obligatorio por parte de las autoridades competentes;
- Bajo ese supuesto, es fundamental que en caso de incumplimiento se cuente con un recurso judicial mediante el cual se haga exigible ese mandamiento expreso, pues no hacerlo así vulneraría los derechos de la ciudadanía,
- Las disposiciones que regulan la consulta popular son tanto formal como materialmente electorales; por lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer de aquellas demandas en las que se alegue la omisión de cumplir con los resultados vinculantes de una consulta popular,
- A efecto de analizar lo anterior, el órgano jurisdiccional debe observar cuál es el contenido de los derechos humanos cuyo goce y protección pueden ampliarse con las acciones que las autoridades vinculadas están obligadas a implementar, debiendo

acreditar estas últimas su cumplimiento, demostrando que están haciendo uso del máximo de los recursos posibles, y

- Que la ciudadanía cuenta con interés legítimo para exigir judicialmente el cumplimiento de los resultados vinculantes de una consulta popular.

● Referencias

Amparo en revisión 566/2015. Voto particular del Ministro José Ramón Cossío Díaz.

Disponible en

<https://www2.scjn.gob.mx/consultatematica/paginaspub/DetallePub.aspx?AsuntoID=18106>

9 (consultado el 1 de agosto de 2022).

CADH. Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2022. Estados Unidos: Organización de Estados Americanos.

Castañeda Gutman vs Estados Unidos Mexicanos. Víctima: Jorge Castañeda Gutman. Estado demandado: México. Disponible en <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM01.pdf> (consultado el 1 de agosto de 2022).

CDH. Comité de Derechos Humanos. 1996. Observación general no. 25 - Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas (art. 25). Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.7&Lang=es (consultado el 1 de agosto de 2022).

CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2022. México: Cámara de Diputados.

Duarte Rivas, Rodolfo, 2002, “Capítulo I. Antecedentes históricos de la justicia político-electoral en México”, en Evolución histórica de las instituciones de la justicia electoral en México. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Jurisprudencia P./J. 25/99. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/194155> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Tesis P. LX/2008. AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/162431> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 1/2012. ASUNTO GENERAL. LAS SALAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁN FACULTADAS PARA FORMAR EXPEDIENTE, ANTE LA IMPROCEDENCIA DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN ESPECÍFICO. Disponible en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=1/2012&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,1/2012> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 27/2011. COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE. Disponible en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2011&tpoBusqueda=S&sWord=comunidade,indigenas,legitimacion> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Sentencia SUP-JDC-1127/2021. Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano y Juicio Electoral. Promoventes: José Mario de la Garza Marroquín y otros. Autoridades responsables: Congreso de la Unión y otros.

Tesis 1a. CXXIV/2017. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. DEBER DE PROTEGER DE MANERA INMEDIATA SU NÚCLEO ESENCIAL. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2015130> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Tesis 1a. XV/2021. DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022889> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Tesis P. II/2007. DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES. CUANDO SU EJERCICIO INCIDA TOTALMENTE SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL, NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PREVISTO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO SE VINCULE CON LA VIOLACIÓN DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/173575> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 1a./J. 37/2016. DIGNIDAD HUMANA. CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012363>

Jurisprudencia 1a./J. 42/2007. GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/172759> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 9/2015. INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL SE ESTABLECEN. Disponible en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acceso,a,la,justicia>

Jurisprudencia P./J. 125/2007. MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/170703> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 14/2014. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO. Disponible en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2014&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,14/2014> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Tesis P. XVI/2005. NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/178415>

Jurisprudencia P./J. 11/2006. OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175872> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia P./J. 9/2006. PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175847> (consultado el 1 de agosto de 2022).

Jurisprudencia 7/2013. PUEBLOS INDÍGENAS. SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JURISDICCIÓN ELECTORAL. Disponible en <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2013&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,7/2013> (consultado el 1 de agosto de 2022).

LFCP. Ley Federal de Consulta Popular. 2022. México: Cámara de Diputados.

LGSMIME. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 2022. México: Cámara de Diputados.

Martín Huertas, Ascensión. 2008. El contenido esencial de los derechos fundamentales. *Revista de las Cortes Generales*, (75), 105-190.

Rebollo Fernández, José Luis. 2000. La jurisdicción electoral. En: *Apuntes de derecho electoral. Una contribución institucional para el conocimiento de la ley como valor fundamental de la democracia*. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tesis 1a. XVIII/2018. TIPOS DE OMISIONES COMO ACTOS DE AUTORIDAD PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Disponible en <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016428> (consultado el 1 de agosto de 2022).